

Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 24 de 1874.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatán, por D. Salvador Rodríguez, contra el Magistrado primer suplente de Circuito, C. Lic. Francisco Martínez de Arredondo, por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

D. Salvador Rodríguez, capitán del vapor español "Lola," pretende que se le ampare contra el primer Magistrado suplente de Circuito, que le manda representar con firma de letrado, en el juicio de comiso de que está conociendo en grado de apelación por haberse ejecutado operaciones de contrabando con aquel buque, como lo tiene justamente declarado el fallo de primera instancia. Aunque este recurso viene apoyándose en la frac. 5ª del art. 20 de la Constitución federal, la misma exposición de los hechos verificada en el escrito del ocurrente, descubre desde luego que no existe violación alguna de la garantía invocada, porque ella se refiere á causas criminales, de las que dista mucho el referido juicio de comiso; lo cual es tan cierto, que en él no se ha tomado al quejoso su declaración preparatoria, ni se le ha careado con los testigos que declaran en su contra y con quienes está en evidente contradicción; ni se han practicado, en fin, todas aquellas diligencias indagatorias que caracterizan el juicio criminal, al cual se refiere el citado art. 20 de la Constitución. Y estas circunstancias que demuestran la improcedencia del amparo intentado, se hacen todavía mas patentes con

el informe del C. Magistrado suplente de Circuito, contra quien se intenta, pues como dice muy bien, el auto que manda al Sr. Rodríguez representar con firma de letrado, no solo no viola ninguna de las garantías comprendidas en la fracción del repetido artículo, sino que fué dictado en conformidad con la ley que reglamenta los procedimientos en el juicio de comiso, con tanta mas razón, cuanto que el quejoso no representa en él mas que derechos ajenos en su calidad de capitán del vapor "Lola."

Siendo falso, pues, el fundamento del recurso intentado, el fiscal pide á usted declarar:

Que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á D. Salvador Rodríguez contra la providencia que le manda representar, con su carácter de capitán del vapor español "Lola," con firma de abogado, en sus escritos relativos al juicio de comiso, á que está sujeto dicho buque.

Mérida, Agosto 10 de 1874.—*P. III-juecos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mérida, Agosto 12 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por D. Salvador Rodríguez, C. español, contra el C. Magistrado primer suplente de Circuito, por creer que ha violado en su persona la fracción 5ª del art. 20 constitucional, exigiéndole firma de letrado en sus escritos. Visto lo informado por dicho C. Magistrado; el pedimento fiscal y la citación para sentencia.

Considerando: Que la frac. 5ª del art. 20 constitucional, se refiere á juicio criminal, y que el en que se ha exigido firma de letrado al quejoso, es civil, como en efecto lo es el de comiso del vapor español "Lola," buque de que era capitán el actor.

Considerando: Que la firma de abogado la previene el art. 158, concordante del 142 del Arancel vigente en procedimientos de comiso, de 4 de Octubre de 1845.

Considerando: Que el mandamiento de

esta ley no contraría ningun artículo de la Constitución federal, y por consiguiente no viola ninguna garantía individual.

Por lo expuesto, y de conformidad con el parecer fiscal, la autoridad, en nombre de los Supremos poderes, falla:

1º: Que el recurso es improcedente, quedando á la calificación de la Corte Suprema la pena que se deba imponer por él, al actor.

2º: Sáquese testimonio de este fallo, para su publicación, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia, en revision, con arreglo á los arts. 13 y 27 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.—Hágase saber.—*Manzanilla.*—Ante mí, *José A. Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 6 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatán, por D. Salvador Rodríguez, contra el Magistrado primer suplente de Circuito, C. Lic. Francisco Martínez Arredondo, por violación de garantías constitucionales, y

Considerando: Que en el presente juicio se trata de un acto de un Magistrado de Circuito.

Que supuesta tal circunstancia, se hace indispensable examinar, por punto general, si el recurso de amparo procede contra los actos de las autoridades judiciales de la federación.

Que para fundar que sí procede, pudiera alegarse que el art. 101 de la Constitución de 1857, al establecer el recurso de amparo, lo hace extensivo, sin escepcion alguna, á los actos de cualquiera autoridad que viole las garantías individuales.

Que igualmente pudiera alegarse, en ese sentido, la práctica constante observada en la Corte de Justicia; de considerar admisible el recurso de amparo en negocios judiciales, á pesar de prohibirlo expresamente

el art. 8º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

Que sin embargo de estas consideraciones, la cuestion debe resolverse en sentido negativo, por varias razones, de mucho peso todas.

Que de los recursos de amparo contra los actos de las autoridades judiciales de la Federación, no podrían nunca conocer, sino ellas mismas, porque el citado art. 101 de la Constitución de 1857 comete exclusivamente á los tribunales federales, la resolución de toda controversia que se suscite por actos que violen las garantías individuales.

Que correspondiendo exclusivamente á los tribunales de la Federación el conocimiento de los recursos de amparo, se introduciría un desorden é irregularidad inevitables en la categoría jerárquica de esos mismos tribunales, sometiendo los actos reclamados de los de Circuito y de la Suprema Corte, á la calificación y resolución de los Juzgados de Distrito, que conocen de los juicios de amparo, en primera instancia, y que son inferiores á los otros.

Que correspondiendo á la Corte de Justicia revisar las sentencias de los jueces de Distrito, en los juicios de amparo, para aprobarlas, revocarlas ó modificarlas, llegaría así, cuando se tratara de sus propios actos reclamados, á revisar á su vez la calificación y resolución que sobre ellos hubiera recaído en los juzgados de Distrito, privados, de esa manera, de la libertad necesaria para semejantes actos.

Que si bien, respecto de los Tribunales de Circuito, sucede en la actualidad, que la ley vigente no les da intervencion alguna en los juicios de amparo, ni tal circunstancia quita la posibilidad de que una nueva ley reglamentaria les devuelva esa intervencion que han tenido ya por otra ley, ni les priva de su carácter de Tribunales federales, ni permite que sus actos queden sometidos nunca á sus inferiores jerárquicos.

Que conociendo los Tribunales de la Federación en los juicios de amparo de sus

propios actos reclamados, vendrían á ser, en realidad, á la vez jueces y partes en un mismo negocio, lo cual repugna á los principios mas elementales del derecho, y aun al simple sentido comun.

Que en defensa de los que estimen violadas sus garantías individuales, por los Tribunales de la federacion, queda siempre vivo y subsistente el recurso de exigirles la responsabilidad en que hubieren incurrido, cambiándose, así, mas bien en la forma que en la sustancia el amparo constitucional.

Que como última y definitiva contestacion á las objeciones que pudieran todavía formularse respecto de los inconvenientes de la interpretacion que se da al texto de la Constitucion, queda el razonamiento de que en las instituciones humanas, se acaba siempre por llegar á un punto del que ya no se puede pasar, por mas imperfecciones que presenten.

En virtud de estas consideraciones y fundamentos, se decreta:

Que se reforma la sentencia del Juzgado de Distrito del Estado de Yucatán, pronunciada en 19 de Agosto del corriente año, declarándose improcedente el recurso de amparo promovido contra el C. Magistrado primer suplente del Tribunal de Circuito de Mérida, por violacion del art. 8º de la Constitucion federal.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; y firmaron.—*José M. Iglesias. M. Auza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José G. Ramirez.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 17 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, por D. Ramon Alvarez Nieto, contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Tesorero del fondo de instruccion pública, ha informado que procede á hacer efectiva la multa de diez pesos que el Tribunal Superior de Justicia del Estado impuso á D. Ramon Alvarez Nieto, en virtud de la ley del mismo Estado de 11 de Mayo de 1869, y en cumplimiento del deber que le impone la de facultad económica coactiva. Y de la copia que presentó el quejoso, aparece que el Tribunal Superior, al imponer la expresada multa, cumplió tambien con el deber que le impone el art. 234 de la ley, para la Administracion de Justicia, en lo que no hay violacion alguna de garantías de que deba conocer la Justicia federal; procediendo, ademas, el acto reclamado, de un negocio judicial, contra el que la ley de 20 de Enero de 1869, en su art. 3º, niega el recurso de amparo.

Con tales fundamentos, el Promotor fiscal no puede pedir otra cosa, sino que: Se deniegue á D. Ramon Alvarez Nieto la suspension que solicita del embargo con que le tiene conminado el C. Tesorero del fondo de instruccion pública, y es lo que pide en cumplimiento de su deber.

San Juan Bautista, Agosto 24 de 1874.
—*Lic. Cordera.*